

Nicaragua después de las elecciones: los primeros sesenta días¹

Carlos Vilas

Las elecciones del 25 de febrero entregaron el gobierno de Nicaragua a una coalición de grupos heterogéneos, unidos por el común denominador del antisandinismo. Dos meses después de su inauguración es claro que el objetivo central de las nuevas autoridades consiste en desmontar lo que ha sobrevivido del proceso revolucionario a la guerra y a las políticas de ajuste ejecutadas desde mediados de 1988 por el propio gobierno sandinista.

1. ¿«Somocismo sin Somoza»?

Los Decretos 10/90 y 11/90, del 11 de mayo de 1990, crearon las condiciones legales para el desmantelamiento de la reforma agraria y la liquidación del Area de Propiedad del Pueblo (APP). El primero, de «arrendamiento provisional de tierras», concede en tal calidad las tierras aptas para agricultura o ganadería propiedad del Estado o administradas por cualquiera de sus instituciones en virtud de «decretos confiscatorios o expropiatorios o que hubiesen sido declaradas de utilidad pública, y las que bajo cualquier otra forma arbitraria hayan sido confiscadas por el gobierno anterior o que estén en posesión de terceras personas sin ser sus legítimos dueños» (art. 1). El Decreto desconoce la legalidad de las afectaciones de la reforma agraria y de la constitución del APP, con la sola excepción de «las propiedades rústicas confiscadas bajo los Decretos N.º 3, de fecha 20 de julio de 1979, y N.º 38, del 8 de agosto de 1989», dictados por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, de la que doña Violeta formaba parte, y que convirtieron en bienes públicos las propiedades de la familia Somoza. Beneficiarios de esta medida son las personas naturales y jurídicas que acrediten la propiedad de las tierras respectivas y asuman el «compromiso formal de cultivarlas o continuar haciéndolo de inmediato para aprovechar el presente ciclo agrícola» (art. 2, inc. 5).

El Decreto 11/90, «de revisión de confiscaciones», crea una Comisión Nacional de Revisión, facultada para «proceder a la revisión de todas las confiscaciones ejecutadas por el gobierno anterior bajo las leyes y decretos confiscatorios, expropiatorios o de reforma agraria y los que de una u otra forma privaron de sus bienes, derechos y acciones a personas naturales o jurídicas,



respetando los derechos de los campesinos, de las cooperativas que cumplan su función social y económica y de las personas menos privilegiadas» (art. 1). En estos casos excepcionales el Estado pagará indemnizaciones en córdobas oro (la moneda progresivamente introducida por el nuevo gobierno) a los reclamantes insatisfechos (art. 12). «La resolución de devolución servirá como suficiente título para ejercer el derecho pleno sobre los bienes, derechos y acciones reclamados» (art. 11). La excepción de los bienes afectados por los Decretos 3 y 38 de 1979 no se aplica a la revisión de confiscaciones, de modo que también los funcionarios del somocismo y los miembros de la familia Somoza podrán hacer sus reclamaciones.

Inmediatamente después de asumir la Presidencia doña Violeta suspendió el servicio militar y emitió un decreto de amnistía amplia en beneficio de todos quienes abandonaron el territorio de Nicaragua después del 19 de julio de 1979. Los funcionarios y socios del somocismo han comenzado a regresar ya a Nicaragua. Anastasio Somoza Portocarrero, hijo del dictador, director de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI), donde se formaba a los elementos más nefastos de la Guardia Nacional, y sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del periodista y político Pedro Joaquín Chamorro (esposo de doña Violeta), en una acción que detonó el tramo final de las luchas antisomocistas, anunció su próximo retorno, beneficiado también él por la generosa amnistía. Otros miembros de la familia del dictador ya están de regreso en Nicaragua. Esta es una situación novedosa en la historia de las dictaduras latinoamericanas a la vieja usanza. Toda la familia de Rafael Leónidas Trujillo abandonó la República Dominicana después de la muerte del dictador, y nunca regresó. Lo mismo ha ocurrido hasta ahora en Haití con la familia de François Duvalier.

Valiéndose de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el nuevo gobierno está dejando sin efecto la legislación sancionada o reformada por el gobierno sandinista entre el 25 de febrero y el 24 de abril. Han caído hasta el momento las reformas al Código del Trabajo y la Ley de Servicio Civil, y está bajo la mira la Ley de Autonomía Universitaria. Los convenios colectivos de trabajo están siendo sometidos a revisión, y desde el Ministerio del Trabajo se está auspiciando la formación de sindicatos paralelos con los que desarrollar las negociaciones laborales. El sandinismo,

enfrentado ante el hecho inverosímil de la derrota electoral, se embarcó después del 25 de febrero en una intensa actividad legislativa, tratando de hacer en los dos meses que le quedaban de gobierno varias de las cosas que no había hecho en los once años anteriores. Durante esos años, el movimiento sindical no pudo conseguir la sanción de un nuevo Código de Trabajo; en todo el período siguió rigiendo el código sancionado en la década de los cuarenta, durante el gobierno del primer Somoza. El sandinismo adujo la inexistencia de condiciones para tal reforma, y las garantías políticas que la clase obrera temía que sus artículos más regresivos —por ejemplo, la posibilidad de despedir sin aviso previo a un trabajador— jamás serían aplicados por el gobierno revolucionario. Del mismo modo hubo oposición en el gobierno de Daniel Ortega a sancionar una Ley de Autonomía Universitaria —¿cómo podía pensarse en una universidad autónoma del estado popular?— Los ejemplos podrían extenderse. Las modificaciones efectuadas por la Asamblea Nacional bajo mayoría de la UNO han retrotraído la situación a su estado anterior, pero con un gobierno que sí está dispuesto a aplicar los aspectos más antiobreros y antipopulares de aquella legislación.

Por su parte, el Ministerio de Educación ordenó reemplazar los libros de texto de educación básica (hasta cuarto año de enseñanza primaria) por textos preparados por la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) del gobierno norteamericano para el gobierno de Honduras. Se ha prohibido el uso de minifaldas en las oficinas gubernamentales tanto a empleadas como a usuarias. El ministro de Educación, Sofonías Cisneros, y el viceministro, Humberto Belli, son miembros de Ciudad de Dios, un grupo católico tradicionalista del que también forman parte el ministro de Salud, Ernesto Salmerón; su viceministro, Petronio Delgado; el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal (cuñado de doña Violeta) y el empresario Carlos Mántica, asesor de la presidente para asuntos religiosos.

El triunfo de la jerarquía de la Iglesia católica es notorio. La situación de las comunidades de base, que reclutan a sus adherentes más en las ciudades —Managua ante todo— que en el campo, y más en la pequeña burguesía que en la clase obrera y el campesinado, es precaria. El sandinismo militante que ostentaron no se tradujo en resultados electorales, y ahora deberán pagar su enfrentamiento a la jerarquía y su exaltación

acrítica del régimen derrotado —muy parecida a la posición de la jerarquía respecto del somocismo en la etapa presandinista—. El cardenal Miguel Obando, viejo antagonista del sandinismo, es el vencedor neto de toda esta compleja y dramática historia de revolución y contrarrevolución. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, cuyos miembros tienen una larga lista de cuentas por cobrarle al sandinismo —el «caso Carballo», la expulsión de sacerdotes por su involucramiento en actividades opositoras, las sanciones contra el obispo Vega por su colaboración con la contra, las sanciones contra Radio Católica, los coquetos del gobierno sandinista con los predicadores evangélicos de Estados Unidos, el apoyo de Daniel Ortega al «congreso de brujos» de febrero de 1990, etc.—, emitió el 6 de junio una declaración de derogación de las leyes sancionadas por el sandinismo por atentar contra la democracia y el bien común.

La política económica ejecutada hasta ahora guarda continuidad con las que el sandinismo venía aplicando desde mediados de 1988 —algo que este autor anticipó antes incluso de las elecciones de febrero²: liberación de precios, restricciones crediticias, devaluaciones sucesivas, etc. Las cooperativas y el campesinado, excluidos del Decreto 11/90, están sufriendo los embates de la política crediticia y de precios, y del mercado. Habrá que ver, dentro de dos o tres años, cuántos pueden cumplir con su «función social y económica» y siguen al frente de sus tierras. El lanzamiento hacia un nuevo plan de ajuste e intentos serios de reactivación económica dependen de la resolución de la cuestión de la deuda externa, de un monto acumulado de \$ 10.000 millones, y del acceso a divisas líquidas, una crónica carencia del régimen sandinista. Hasta el momento se dispone de \$ 300 millones de ayuda de emergencia aprobada por el gobierno de Estados Unidos, que rápidamente levantó las sanciones económicas que aplicó al gobierno sandinista, y de 120 millones obtenidos en la Conferencia Internacional de Donantes de Roma (frente a una demanda original de \$ 350 millones) y la promera de \$ 180 millones a desembolsarse en 1991. Venezuela, cuyo presidente, Carlos Andrés Pérez, es viejo amigo de doña Violeta, redujo la deuda petrolera de \$ 150 millones que tenía Nicaragua y reinició el suministro de crudo, suspendido desde 1982.

El éxito relativo de la solicitud del nuevo gobierno contrasta con los magros resultados de una reunión similar convocada por el gobierno

sandinista en Estocolmo en mayo de 1989. Sin embargo, los desembolsos inmediatos son inferiores a las necesidades también inmediatas de Nicaragua. Es posible que esta circunstancia esté reflejando la intención de la comunidad internacional de observar el desempeño de un gobierno cuyo equipo económico carece de experiencia previa en asuntos de política económica, antes de arriesgar mayores fondos.

Las empresas del sector estatal de la economía serán privatizadas. La dirección de 24 importantes corporaciones, de las que dependen unas 400 empresas estatales, fue entregada a un grupo de empresarios locales simpatizantes del gobierno, a fin de que las vendan. Grupos empresariales del Sur de Estados Unidos —algunos de ellos pertenecientes a la comunidad de origen cubano radicada en Florida— han anticipado su interés en considerar ofertas.

Un aspecto de la política económica al que se asigna mucha importancia es la creación de una nueva moneda, el «córdoba oro», con paridad 1 = 1 con el dólar estadounidense, que deberá sustituir progresivamente al córdoba actual. El objetivo es introducir una moneda sólida que suscite la confianza del público. El modelo implícito del «córdoba oro» es el de las monedas centroamericanas durante la década de los sesenta, o el del balboa panameño antes de la crisis de las relaciones Panamá/Estados Unidos. Hasta el momento, la medida ha sido recibida con cierto escepticismo. Para que funcione efectivamente, la nueva moneda debe disponer de un sólido respaldo en divisas, a su turno apoyado en una capacidad de generación de divisas, de los que Nicaragua carece hasta ahora y en el futuro próximo. Debe contarse asimismo con un sistema estable de precios internos, aún lejos de alcanzarse, y con un tipo de cambio único y estable, que es también una hipótesis de ardua verificación. La transición hacia la nueva moneda implica una progresiva dolarización de la economía nicaragüense, en la medida en que los precios de los servicios públicos, la recaudación impositiva y conjuntos crecientes de precios se fijan y abonan en «córdobas oro», es decir, en dólares.

Contra las previsiones de sandinistas y de observadores, el gobierno de doña Violeta está dispuesto a revertir lo antes posible las instituciones y muchas de las conquistas de la revolución, y aún tiene seis años por delante. Resulta evidente la fragilidad de esas instituciones y conquistas, una vez que el gobierno sandinista cayó. En úl-

timo análisis, el objetivo del nuevo gobierno es poner a Nicaragua en las condiciones sociopolíticas en que se habría encontrado en 1978 si Anastasio Somoza hubiera aceptado las presiones de Estados Unidos y se hubiera marchado: un «somocismo sin Somoza» en su acepción más literal y restrictiva. El programa del nuevo gobierno —no el que abonó su campaña electoral, sino el que está ejecutando efectivamente— es de contenido y alcance contrarrevolucionario, en el sentido literal de ir contra las realizaciones de la revolución, aunque no haya habido en Nicaragua una invasión como en Guatemala en 1954, o un golpe de Estado como en Chile en 1973. Se trata de desmontar todo lo que tiene que ver con el modo revolucionario en que hubo que deshacerse de la dictadura somocista.

Las diferencias dentro del nuevo gobierno —por ejemplo, entre el grupo «duro» del vicepresidente, Virgilio Godoy; los elementos más claramente ligados al somocismo y a la comunidad cubana de Miami, capitaneados por el alcalde de Managua, y el grupo de asesores más próximo a doña Violeta, vinculados a CORDENIC³— se refieren más a estilos y modalidades de acción que a los alcances o el contenido del programa. A pesar de sus tensiones y diferencias internas, la UNO se ha comportado de manera unida para desmontar logros e instituciones de la revolución, y doña Violeta ha recurrido a las amplias facultades presidenciales reconocidas por la Constitución política de 1987 —aprobada por el sandinismo— cada vez que podía preverse la existencia de resistencias o diferencias de criterio dentro de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional que pudieran amenazar su mayoría absoluta.

2. La oposición sandinista

Después de once años de ejercicio del gobierno y de control exclusivo de los recursos del Estado, el sandinismo está encontrando problemas para diseñar una estrategia opositora definida. La hipótesis sandinista de conflictos internos dentro de la UNO a partir de los cuales aplicar una política de dividir y reinar, negociando la permanencia de las principales instituciones de la revolución con el grupo de asesores más próximo a doña Violeta, ha resultado hasta ahora desvirtuada por los hechos.

Dos meses después del cambio de gobierno, el FSLN proyecta una imagen ambivalente en su papel de principal partido de oposición, tensionado por una doble posibilidad: optar por un perfil negociador, adoptando el rol de interlocutor constructivo en nombre de la nación nicaragüense y la democracia concebidas al margen de las tensiones y contradicciones sociales y de los proyectos políticos que la cruzan —el tipo de oposición que el nuevo gobierno desea⁴—, o bien recurrir a una oposición militante en función del carácter antipopular e incluso revanchista de las principales medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno de la UNO. En última instancia, esta ambigüedad en el perfil opositor del FSLN testimonia una vez más la coexistencia de enfoques y tendencias heterogéneas en el seno de una organización policlasista tensionada por una mezcla de inclinaciones socialdemócratas, marxistas, nacional-revolucionarias y tenocrático-desarrollistas —una cuestión a la que me he referido anteriormente⁵.

El masivo y en buena medida espontáneo movimiento huelguístico de mediados de mayo en oposición a las políticas regresivas mencionadas más arriba, que amenazó con paralizar completamente el país, ilustra el estado de ánimo de amplios sectores de población —incluyendo posiblemente a mucha gente que votó por la UNO— ante medidas que golpean directamente importantes logros de la revolución, aunque muchos de ellos hubieran sido duramente golpeados por las políticas sandinistas de ajuste: estabilidad en el empleo, libertad sindical, acceso a una canasta básica de consumo. La oleada de huelgas mostró un nivel de activación de masas y de activismo sindical del que no había precedentes desde la época de la *insurrección antisomocista*. Por otro lado, la participación del ex vicepresidente Sergio Ramírez en la misión del gobierno de Nicaragua a la Conferencia de Donantes celebrada a principios de junio en Roma para fortalecer las demandas de cooperación internacional, ilustra la insistencia sandinista en ofrecer una imagen externa de madurez y colaboración en nombre de la nación, aunque en concreto resulte en afianzar a un gobierno que ha erigido en objetivo central de su acción la liquidación de la revolución sandinista.

Ambas corrientes comparten la preocupación de evitar una confrontación interna que podría arriesgar a una fractura del FSLN. Por ejemplo, la decisión partidaria de explicar la derrota elec-

toral por «la agresión norteamericana» adoptada por la primera Asamblea Nacional de la militancia sandinista (junio 17-18) es un intento de poner fin al debate interno en torno a un tema que se prestaba a que las críticas se transformaran en recriminaciones y ajustes de cuentas contra los que condujeron el proceso electoral, la política económica y las concesiones a la comunidad de negocios y la derecha interna e internacional. Dentro de estos límites, las tensiones y forcejeos son evidentes. Daniel Ortega se mantiene al frente del partido, pero se ha encomendado a otro miembro de la Dirección Nacional, el comandante Luis Carrión Cruz, la elaboración de un plan de reorganización partidaria. En este sentido, Daniel Ortega ha conseguido menos que su hermano Humberto, a quien doña Violeta encomendó elaborar la propuesta de reorganización del Ejército. Otros dos miembros de la Dirección Nacional, Bayardo Arce y Henry Ruiz, se hicieron cargo de los asuntos financieros y las relaciones internacionales, respectivamente —dos áreas que hasta ahora habían estado a cargo de equipos afines al ex presidente y su entorno inmediato.

Del mismo modo, la Comisión Organizadora del I Congreso Partidario del FSLN (a celebrarse en 1991) integra a figuras pertenecientes a las dirigencias sindicales que condujeron las huelgas de mayo, partidarias de asumir posiciones relativamente duras en la defensa de las conquistas revolucionarias que aún subsisten, junto a algunos de los colaboradores más cercados del ex presidente, más proclives a la contemporización y el regateo. Las diferencias de posición se refieren también al futuro del FSLN. Mientras las corrientes combativas plantean la constitución de un partido político, con estructuras orgánicas, disciplina, estatutos, etc., Daniel Ortega se opone a tal transformación y postula que el Frente se mantenga como tal: una organización amplia con una estructura laxa ⁶.

La posición de los grupos negociadores dentro del sandinismo es débil en lo inmediato no sólo por la responsabilidad que se les asigna por la pérdida del gobierno, sino también por algunos hechos subsiguientes. Por ejemplo, el conocimiento público de que la estrategia de fuga de capitales del principal grupo financiero nicaragüense en 1977 y 1978 fue diseñada por quien ejerció durante el gobierno sandinista como ministro de Finanzas y posteriormente presidente del Banco Central (*La Prensa*, 18 de mayo de

1990; *Barricada*, 25 de mayo de 1990), dio argumentos adicionales a los críticos del enfoque negociador. Además, perteneciendo a sectores sociales de mayor nivel económico, o habiendo mejorado considerablemente sus condiciones de vida después de una década de ejercicio del gobierno, los partidarios del entendimiento y la negociación ofrecen flancos adicionales a las críticas internas de los activistas y las bases. Mientras éstos ingresan a la nueva etapa en condiciones económicas y laborales precarias, aquéllos lo hacen como propietarios y empresarios ⁷.

Hasta el momento, la estrategia negociadora ha rendido pocos frutos, si alguno, al sandinismo. La importancia asignada por el FSLN a la permanencia de muchos de sus altos cuadros en cargos estatales —el ministro-director del Instituto Nicaragüense de Energía, el comandante en jefe del Ejército, el jefe y mandos superiores de la Policía, direcciones en varios Ministerios— no tiene correlato en la capacidad de estos funcionarios para modificar el contenido o los alcances de las políticas efectivamente ejecutadas por el gobierno de la UNO. La permanencia del general Humberto Ortega y de los mandos superiores del Ejército al frente del Ejército Popular Sandinista (EPS), llevada a cabo a costa de sus renuncias a los cargos que ostentaban en las estructuras partidarias del FSLN —en el caso de Ortega, a su condición de miembro de la Dirección Nacional del FSLN—, tuvo como explicación la necesidad de mantener la conducción militar hasta que la contra se desmovilizara completamente.

Es posible que mucha gente se desvincule del FSLN, ante todo aquellos que se unieron a él no tanto por convicción ideológica como por un interés en progresar en la vida. Durante muchos años, la superposición entre estado y partido asignó al primero, y por extensión a quienes se desempeñaban en su ámbito, una definición ideológica sandinista que si antes era dudosa en muchos casos, ahora ya no existe. Incluso muchos de los que se incorporaron a funciones estatales en nombre de la revolución o como una «tarea política», después de diez años ven en ellas simplemente un *modus vivendi*.

El sandinismo deberá enfrentar una estrategia de desgaste y neutralización política de sus tendencias más revolucionarias, impulsada tanto por el gobierno de la UNO como por el de Estados Unidos. No debe descartarse que misteriosos accidentes afecten a sus dirigentes y cuadros más combativos, al mismo tiempo que sus elementos

más «razonables» sean fortalecidos, apoyados, seducidos desde el exterior. Una estrategia de castración política similar a la que se aplicó exitosamente en Jamaica, que vació de toda potencialidad conflictiva al segundo gobierno de Michael Manley, y que en el caso de Nicaragua tiene como objetivo separar al FSLN de las masas para impedir su retorno al gobierno, o en todo caso asegurar que el FSLN que a pesar de todo retorne al gobierno, tenga muy poco que ver con proyectos de democratización profunda y transformación estructural. Es innegable que existen dentro del FSLN elementos receptivos a esta mutación: aquellos para quienes las transformaciones socioeconómicas de signo popular poco tienen que ver con el proceso de democratización y que reducen la democratización a la alternancia electoral en el ejercicio del gobierno: una clara coincidencia con la concepción del «somocismo sin somoza», señalada más arriba ⁸.

3. Los contras

La desmovilización de la Resistencia Nicaragüense (RN) plantea dos cuestiones básicas. La primera se refiere a la lentitud del proceso, provocada fundamentalmente por la renuencia de la dirigencia contrarrevolucionaria y su convicción de que cuenta con las simpatías del gobierno; la segunda tiene que ver con el futuro de la contra y el modo en que se reintegrará a la vida diaria.

En lo que toca a la primera cuestión, los convenios suscritos por los mandos militares de la RN y el gobierno determinaron que el proceso de desmovilización debía culminar el 10 de junio, pero al arribarse a esa fecha todavía quedaban unos 3.500 hombres sin desarmarse. Se resolvió en consecuencia fijar una nueva fecha tope: el 29 de junio, coincidente con la finalización del mandato de ONUCA, la misión de Naciones Unidas encargada de supervisar la desmovilización. Dada la falta de información precisa sobre el número de efectivos de la contra (entre 13.000 y 18.000 hombres de acuerdo con las estimaciones más frecuentes), es imposible determinar la efectiva conclusión del desarme. Además, las armas entregadas son en su mayoría de tipo liviano; los contras parecen conservar en su poder una importante dotación de cohetes tierra-aire, de cañones sin retroceso de 57 mm. y de morteros de

81 mm. La hipótesis más verosímil al respecto es que este armamento está siendo vendido al FMLN salvadoreño y a elementos de la sociedad guatemalteca ligados al narcotráfico.

Es evidente que la RN juega con el tiempo a su favor; manteniéndose armados y unidos: ¿quién puede decir que dentro de un par de años no econtraremos a algunos de ellos en la oficialidad del Ejército y de la Policía nicaragüense? El gobierno actual ha declarado su decisión de duplicar los efectivos policiales ⁹; nadie puede negar a muchos de los jefes de la RN condiciones técnicas y experiencia para prestar servicios en estos ámbitos.

Reinserción productiva de los contras

En lo que toca a la segunda cuestión, la contra obtuvo del gobierno la concesión de un territorio de casi 26.000 hectáreas, que abarca casi todo el Departamento de Río San Juan, al sureste del lago de Nicaragua, en la frontera con Costa Rica. En este «polo de desarrollo», según unos, «zona de seguridad» de acuerdo a otros, los contras se disponen a recibir asistencia económica de agencias gubernamentales para actividades productivas. En él, los contras ejercerán funciones de policía local, ya que al mismo tiempo han sido autorizados a montar cuerpos de vigilancia, formalmente subordinados al Ministerio de Gobernación —sucesor del Ministerio del Interior—. La formación de estos cuerpos policiales indica que, independientemente del nombre que se le asigne a la nueva fuerza armada, la desmovilización será parcial y que una buena parte de ellos permanecerá bajo las armas, obedeciendo a sus propios mandos en un verdadero enclave.

La ubicación geográfica de este territorio, fronterizo con Costa Rica y con la costa del Atlántico próxima a la isla colombiana de San Andrés, las condiciones ecológicas y la vigilancia armada de los propios contras sugieren que los desalzados habrán de dedicarse al próspero negocio de la narcoagricultura. La vasta área asignada corresponde al bosque tropical húmedo, en proceso de deforestación en virtud de la expansión de la ganadería en los últimos treinta años. Debido a la alta pluviosidad y suelos arcillosos, la tierra no es apta para la agricultura, en particular para el tipo de agricultura a la que se dedican los miembros de la contra de origen campesino, en su mayoría provenientes de otras zonas del país. Los proyec-

tos de reforestación son caros y de largo plazo, y poco rentables. A causa de la guerra, la población del Departamento de Río San Juan (alrededor de 30.000 habitantes en una superficie de más de 10.000 millas cuadradas) fue reasentada en proyectos cooperativos en áreas próximas a San Carlos (cabecera del Departamento y principal centro urbano). Por lo tanto, la mayor parte de Río San Juan está deshabitada y con comunicaciones poco satisfactorias con el resto del país.

El enclave de la contra llega hasta la ribera norte del río San Juan; cruzando el río se encuentra, a menos de un par de kilómetros, la frontera con Costa Rica. Del lado costarricense se ubican grandes fincas ganaderas, algunas de ellas propiedad de norteamericanos, que en el pasado estuvieron ligados a los efectivos contrarrevolucionarios que operaban desde ese país. Estas propiedades cuentan con pistas de aterrizaje, y hubieron denuncias frecuentes de que dichas facilidades se empleaban tanto para apertrechar a los contras como para reexportar droga hacia el Norte. La franja costera oriental del enclave se asoma a una zona del Atlántico que es ruta tradicional del narcotráfico. Durante el «*affair*» Irán/contras también salieron a relucir las vinculaciones entre abastecimiento a la contra por colaboradores del gobierno norteamericano y tráfico de drogas.

Con la política económica impulsada por el gobierno de Managua, inspirada en los enfoques de ajustes y restricciones del gasto público, eliminación de subsidios, devaluaciones permanentes, etcétera, la agricultura y la ganadería en pequeña escala dedicadas a rubros convencionales de exportación y consumo local serán poco rentables para el futuro. Una racionalidad económica elemental demuestra que no hay cultivo que, en estas condiciones, ofrezca la rentabilidad de los narcóticos, y las condiciones ecológicas de Río San Juan resultan propicias para la amapola y la marihuana. Obviamente, este es el tipo de cultivos cuya existencia se niega y se protege militarmente: una misión para la cual los cuerpos de vigilantes de la contra aparecen como anillo al dedo, y con la ventaja adicional del autofinanciamiento.

El proyecto político

Al mismo tiempo, algunos dirigentes de la contra han anticipado la decisión de constituir su propio partido político, que aspira a reclutar ad-

herentes incluso entre los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista (EPS) y los desengañados del sandinismo, sobre la base del denominador común de los que, desde uno u otro bando, pelearon la guerra durante los años pasados, por oposición a los que, también en uno y otro bando, dirigieron la guerra desde Managua o desde Miami. Una convocatoria política que apela a identidades sociales, étnicas y culturales básicas y que puede llegar a alcanzar amplias resonancias. Por lo menos dentro de los contras, las tensiones y conflictos entre los jefes militares que pelearon la guerra y que ahora han asumido la conducción política —los comandantes Israel Galeano («Franklin»), Oscar Sobalvarro («Rubén»), Enrique Zelaya («doctor Henry») y otros, entre los principales— y gente como Alfredo César, Adolfo Calero, el coronel Bermúdez de la Guardia Nacional y otros son notorias. Los primeros acusan a los segundos de haber abandonado la lucha y de haberlos traicionado negociando con el sandinismo, de haberse entregado a las familias tradicionalmente dominantes en Nicaragua y al «gobierno de la burguesía»¹⁰.

¿Qué receptividad puede tener este proyecto en otros sectores? Es prematuro avanzar respuestas, pero la cuestión puede convertirse en un factor de fuerte desestabilización política y social. Los ejércitos desmovilizados siempre plantean problemas a los gobiernos, especialmente los ejércitos militar o moralmente derrotados. El EPS venció militarmente a la contra, pero las condiciones diferenciales de desmovilización de uno y otra convierten a la segunda en triunfadora moral; en todo caso, en vencedora política. Los contras dispondrán de territorio, crédito, facilidades y, sin duda, de la preferencia oficial. Los desmovilizados del EPS tendrán que hacerle frente a una economía en crisis y a políticas crediticias restrictivas, que ofrecen pocas, si alguna, posibilidades de reinserción productiva, y disuaden expectativas de progreso. La experiencia de los afectados por las reducciones presupuestarias del EPS y el Ministerio del Interior en 1989 son ilustrativas para esta nueva oleada de desempleados. Es difícil conseguir trabajo, los desocupados se sienten invadir por una sensación de autodevaluación, de redundancia, de que no hay para ellos un lugar desde donde empezar de nuevo —si es que quedan energías para empezar de nuevo—. Las condiciones para el surgimiento de reacciones individuales y colectivas de resentimiento y frustración están abiertas, especialmente para los re-

clutas, suboficiales y oficiales del EPS que durante la guerra fueron asignados a las posiciones de mayor riesgo y mayor exposición al combate. Alrededor de 40.000 efectivos del EPS serán afectados en lo inmediato por la reducción de las fuerzas armadas ordenada por la presidente de acuerdo al plan presentado por el general Humberto Ortega.

Existen muchas anécdotas y evidencias aisladas de (¿ex?) sandinistas afectados por estas medidas que en las elecciones de febrero votaron por la UNO: un voto inspirado por el resentimiento, antes que por la esperanza. Es previsible que el proyecto político de algunos elementos de la dirigencia militar de la contra encuentre oídos receptivos. Algo así como el partido de los pobres, de los plebeyos, de los mestizos, de los campesinos, de los que se jugaron por encima de las banderas «impuestas» por los señores cultos, ricos, blancos, de uno y otro bando, parientes entre sí y titulares de casi todas las estructuras institucionales del estado —antes y ahora.

Señalemos a título meramente ilustrativo que el industrial Antonio Lacayo Oyanguren, ministro de la Presidencia y yerno de doña Violeta, es sobrino de don Joaquín Cuadra Chamorro (ministro de Finanzas y presidente del Banco Central durante el régimen sandinista), primo hermano del general Joaquín Cuadra Lacayo (jefe del Estado Mayor del EPS), del coronel Osvaldo Lacayo Gabuardi (segundo jefe del Estado Mayor) y de la esposa del comandante de la revolución y miembro de la Dirección Nacional del FSLN, Luis Carrión Cruz (sobrino por parte de madre del ex dirigente de la Resistencia Nacional, Arturo Cruz Porras). El nuevo ministro de Agricultura, Roberto Rondón Sacasa, es primo del ex viceministro sandinista de Desarrollo Agropecuario y cuñado del comandante Víctor Tirado López, también miembro de la DN del FSLN. El nuevo ministro de Telecomunicaciones, Pablo Vigil (cuñado del nuevo ministro de Gobernación, Carlos Hurtado), es hermano del ex ministro sandinista de la Vivienda y posteriormente presidente de la Comisión Nacional de Algodón y cuñado de Pedro Antonio Blandón (viceministro de Cooperación Externa del gobierno sandinista). Asimismo, varios de los altos funcionarios del gobierno actual fueron sandinistas o miembros del gobierno sandinista. Además de los casos notorios de Violeta de Chamorro y de Virgilio Godoy, señalemos a Alfredo César (diputado y secretario de la Asamblea Nacional y

uno de los asesores más influyentes de doña Violeta), que participó de la redacción del programa de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional hasta que abandonó el gobierno y Nicaragua, en 1982; el ministro del Trabajo, José Francisco Rosales, que en la década de 1970 fue miembro de la DN del FSLN; el ministro de Gobernación, Carlos Hurtado, miembro del FSLN desde 1974 y funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) hasta 1982; Francisco Mayorga (presidente del Banco Central), asesor del Ministerio de Planificación entre 1980 y 1982, etcétera.

Las condiciones de vida y la historia reciente de un campesino sandinista son en muchos sentidos similares a las de un campesino partidario de la contra; unas y otra están a un mundo de distancia de las condiciones de vida y de la historia reciente de un señor de Granada, de Managua o de Rivas, sea éste funcionario sandinista, del gobierno de doña Violeta o de la dirección internacional de la contra, y la ideología sirve de muy poco para ocultar esas diferencias —que son en su sentido más estricto diferencias de clase—. En todo caso, el contraste entre la habilidad de los jefes militares de la contra para asegurar a sus gentes una desmovilización digna y las condiciones duras de los desmovilizados del EPS, a pesar de que todos sus más altos oficiales retienen sus posiciones de mando, habrá de generar efectos políticos.

Esta masa de población desarraigada se sumará a la integrada por los desplazados de guerra (unas 355.000 personas), que demandan recursos y soluciones que la escasez de medios y de atención del gobierno de la UNO difícilmente proveerán. En el pasado, el FSLN demostró una óptima capacidad para ponerse al frente de las reivindicaciones, aspiraciones, esperanzas y frustraciones de los que carecían de un lugar bajo el sol, siempre disponibles para apelaciones a la acción política violenta, y hacer de ellos un ariete decisivo en el derrocamiento de la dictadura somocista ¹¹.

Es interesante destacar que uno de los principales analistas del FSLN plantea en un artículo reciente, desde la perspectiva sandinista, esta misma posibilidad: una alianza entre las bases sociales del FSLN y las de la RN, «sobre la base de los intereses populares y en primer lugar los intereses de los obreros organizados de la ciudad y el campo, y el grueso del campesinado, sean éstos campesinos sandinistas o campesinos de la

resistencia»¹². La participación masiva de trabajadores sandinista y no sandinistas en las huelgas de mayo, la colaboración de campesinos sandinistas y simpatizantes de la contra en defensa de sus tierras, la defensa de los salarios y condiciones de trabajo de los obreros del campo de una y otra afinidad política son presentadas por Orlando Núñez como otros tantos indicios de la viabilidad de esta alianza clasista. Una posibilidad que, al contrario, es rechazada por los partidarios de la estrategia negociadora, que la tildan de demagógica e insisten en un FSLN «donde haya espacio para todos los que piensen en términos nacionales y de desarrollo con justicia social», al margen de incómodas reverberaciones clasistas¹³.

En todo caso, la cuestión está abierta, y la convocatoria de un sandinismo derrotado y cruzado por sus reiteradas tensiones internas deberá competir con la de los dirigentes victoriosos de la contra.

NOTAS

¹ Versión revisada del documento presentado en el ciclo «América Latina a la hora de las elecciones». Instituto Mora. México, 5-9 de marzo de 1990.

² VILAS, Carlos M.: «Las elecciones en Nicaragua». *La Jornada* (México), 23 de febrero de 1990.

³ La Comisión para la Recuperación y el Desarrollo de Nicaragua (CORDENIC) fue fundada a principios de 1988 por Enrique Dreyfus, un próspero empresario nicaragüense que fue presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), opositor al sandinismo (que lo encarceló en 1981), consejero de la Banca Lazar Frères y miembro de la Comisión Internacional para la Reactivación y el Desarrollo de Centroamérica (creada por el senador Terry Sanford) y del Interamerican Dialogue. CORDENIC agrupa a un reducido número de empresarios y profesionales, algunos de los cuales integran el gabinete de doña Violeta, además de Dreyfus (ministro del Exterior), Antonio Lacayo Oyanguren (ministro de la Presidencia), Francisco Mayorga (presidente del Banco Central), José Francisco Rosales (ministro del Trabajo).

⁴ Vid. la entrevista a Carlos Hurtado, ministro de Gobernación, en *Pensamiento Propio*, 69 (abril de 1990): 23-25.

⁵ Vid. VILAS, Carlos M.: *Transición desde el subdesarrollo*, cap. III. Caracas, Nueva Sociedad, 1989.

⁶ *La Jornada* (México), 22 de junio de 1990, p. 23.

⁷ Vid., por ejemplo, *Bolsa de Noticias* (Managua), 31 de mayo, 11 de junio y 12 de junio de 1990.

⁸ Véase, por ejemplo, MARTÍNEZ CUENCA, Alejandro: «Alianzas y convivencia básica». *Barricada*, 16 de junio de 1990.

⁹ Declaraciones del ministro del Interior, Carlos Hurtado, en *Excelsior* (México), 23 de junio de 1990.

¹⁰ Vid., por ejemplo, el reportaje al «comandante Franklin» en *Pensamiento Propio*, 70 (mayo 1990): 29-30.

¹¹ Vid. VILAS, Carlos M.: *Perfiles de la revolución sandinista*. Buenos Aires, Legasa, 1984, p. 121 y ss.: «Popular Insurgency and Social Revolution in Central America». *Latin American Perspectives*, 56 (Winter, 1988): 55-77.

¹² NÚÑEZ, Orlando: «Pactos, acuerdos y alianzas». *Barricada*, 14 de junio de 1990.

¹³ MARTÍNEZ CUENCA, Alejandro: *Loc. cit.* Debe recordarse que Martínez Cuenca, ministro de Planificación y Presupuesto del gobierno de Daniel Ortega, fue el ejecutor de la política económica de ajuste que abonó el camino de la derrota electoral del sandinismo y pertenece, por origen y cultura, a las familias más tradicionales de la sociedad nicaragüense.

PUBLICACIONES PERIODICAS

- REVISTA DE TRABAJO
 - REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL
 - ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
 - REVISTA DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA DEL TRABAJO
 - ACTUALIDAD SOCIOLABORAL OIT
 - BOLETIN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
JURISPRUDENCIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
- SERIE ESTADISTICA
 - BOLETIN DE ESTADISTICAS LABORALES
 - ANUARIO DE ESTADISTICAS LABORALES
 - ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
 - ESTADISTICAS DE CONVENIOS COLECTIVOS
 - ESTADISTICA DE HUELGAS Y CIERRES PATRONALES
 - ESTADISTICAS DE PERMISOS DE TRABAJO A EXTRANJEROS
 - ESTADISTICAS DE REGULACION DE EMPLEO
 - INFORMACIONES COOPERATIVAS OIT



MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Centro de Publicaciones